

UNA NEUTRALIDAD ACTIVA DE COSTA RICA PARA LA PAZ EN CENTROAMERICA

Segundo Montes

SEGUNDO MONTES

Antropólogo. Filósofo. Editor de la Revista ECCA de la Universidad Católica, José Simeón Cañas de El Salvador.

Ponencia para el SEMINARIO INTERNACIONAL, organizado por la Universidad Nacional de Costa Rica, Facultad de Ciencias Sociales, Escuela de Relaciones Internacionales, en San José de Costa Rica, del 23 al 25 de noviembre de 1983, sobre el tema "Un Estatuto de Neutralidad Permanente para Costa Rica y Propuestas de Paz para Centroamérica".

La profunda crisis que ha hecho eclosión en el área durante los últimos años, lejos de encaminarse hacia una solución racional y pacífica, con el transcurso de los días se agudiza profundamente y amenaza con estallar catastróficamente, ya sea a nivel regional, ya sea a nivel focal, como ha estallado en diversos grados en Grenada, El Salvador, Nicaragua, Guatemala, y pudiera hacerlo también en Honduras. El hecho de reunirnos aquí un grupo de académicos, actores político-económico-sociales, para analizar estos problemas y dar nuestro pequeño aporte a la búsqueda de una solución más racional y humana, es una responsabilidad que no podemos eludir.

La crisis global del área, así como las crisis focales o parciales, se manifiestan y se plantean a todo nivel, no sólo al nivel económico, social, político y militar, sino también, y muy especialmente, a nivel ideológico. La ideología se cimenta en un elemento de verdad, de realidad, para ser aceptable y creíble, pero a partir de ahí elabora todo un entramado de principios y valores que tratan de explicar el resto de la realidad, encubriéndola, desfigurándola o tergiversándola, de acuerdo a un proyecto específico de interpretación de la misma y de instrumentalización para la construcción de una determinada sociedad.

Nuestra primera tarea, como científicos, como académicos, o como hombres sinceros en busca de un esclarecimiento y de una solución de la realidad conflictiva, tendrá que ser el intentar un gigantesco esfuerzo de desideologización, en la medida en que esto es posible, como condición

previa e indispensable para acercarnos a conocer objetivamente el substrato encubierto por la ideología, para tratar de entender esa compleja realidad a fin de poder elaborar un diagnóstico acertado de la misma, y así iniciar la búsqueda de una solución objetiva y racional de los problemas que originan la crisis y el conflicto.

IDEOLOGIZACION FRENTE A LA REALIDAD

En la crisis de la región se manifiesta en sumo grado la ideologización y su utilización para justificar o excusar las medidas que se toman. Partiendo de un elemento parcial —a veces secundario— de la realidad, se le da un valor explicativo y causal absoluto, y se distorsiona, encubre o tergiversa la totalidad fundamental. Se llega hasta el punto de tener que mentir para justificar las acciones, pero los hechos mismos descubren las mentiras y a veces se tiene que recurrir a nuevas invenciones en una cadena sin término.

a) Extrema ideologización a todo nivel

El famoso *Libro Blanco* elaborado por la administración Reagan a comienzos de 1981 trataba de explicar la guerra civil desatada en El Salvador por la intervención y ayuda de los países socialistas a los revolucionarios salvadoreños, planteándolo como un enfrentamiento Este-Oeste, a fin de justificar la ayuda militar y económica al gobierno salvadoreño y contener el avance guerrillero para preservar la democracia. Esta línea ideológica se ha mantenido fundamentalmente en los casi tres años transcurridos desde entonces —y en cierto modo se ha renovado en las declaraciones del señor Ikle, en su reciente y súbita visita a San Salvador, al afirmar que los escuadrones de la muerte tienen vinculaciones con la guerrilla—. La escasa credibilidad otorgada al documento, incluso por los aliados más firmes de los EE. UU., así como la fuerte crítica suscitada por distintas fuerzas sociales y políticas norteamericanas, no han logrado más que ligeras modificaciones de forma en la interpretación ideologizada del conflicto, a modo de impedir el de-

rumbe del sistema, el triunfo del proyecto revolucionario y el apoyo internacional.

El caso nicaraguense es interpretado como una violación a los compromisos contraídos al momento del triunfo sandinista, como una postergación excesiva o indefinida de las elecciones y del proceso democrático, como una radical y sistemática violación de los derechos fundamentales, así como una cabeza de playa del comunismo internacional, especialmente a través del apoyo onmodo cubano y soviético, para exportar la revolución a la región y servir de base logística y política a los movimientos guerrilleros de la misma. Cualquier muestra de apertura, de buena voluntad, de oferta de diálogo y negociación de parte de su gobierno, es interpretado como insuficiente, como táctica dilatoria o engañosa para proseguir con los objetivos marxistas.

A Honduras se la presenta como amenazada por la agresión actual y potencial de parte de los sandinistas y de los revolucionarios salvadoreños o guatemaltecos; se la presenta también como un modelo de tránsito a la democracia, de refugio humanitario para los que huyen de los países vecinos, pero en peligro inminente de convertirse en nido para movimientos guerrilleros o en un corredor de aprovisionamiento de armas y de hombres desde Nicaragua hasta El Salvador y Guatemala. Se intentará justificar la presencia de flotas de guerra norteamericanas en ambos océanos, los operativos conjuntos, el despliegue de armamentos y de hombres, la modernización de aeropuertos militares y de sistemas de comunicación, la concentración de tropas cerca de las fronteras, la ayuda encubierta primero y después declarada a los movimientos antisandinistas, como un medio para impedir el abastecimiento de la guerrilla salvadoreña desde Nicaragua a través de Honduras, aunque al no poderse detectar ningún envío, a pesar de los sofisticados medios empleados, se proclamará a los antisandinistas "luchadores de la libertad", se perderá el rubor de reconocer que se pretende la desestabilización y caída del régimen sandinista, y se acusará al gobierno de Managua en los foros internacionales y en los medios de comunicación occidentales de estarse armando excesivamente y de ser agresor actual o potencial.

Grenada sería acusada reiteradamente de constituir una amenaza a la seguridad de los Estados Unidos, a pesar de contar con una población que apenas sobrepasaba los cien mil habitantes, de ser una colonia cubana y una base potencial de la Unión Soviética, de que estaba ampliando el aeropuerto no para dar servicio a naves comerciales sino para escala de los aviones

de combate. Se tomaría la excusa de una lucha interna por el poder, en la que había sido asesinado el Primer Ministro, Maurice Bishop —a quien a pesar de haberlo tildado siempre de títere, después de su muerte se trataba de presentarlo como un hombre moderado—, para realizar un desembarco e invasión militar de los Estados Unidos con un acompañamiento apendicular y simbólico de tropas de varios países caribeños. La justificación que buscó la administración Reagan ante la conciencia nacional e internacional fue la de defender la vida de los ciudadanos norteamericanos —la que nunca había estado amenazada o en peligro—, pero su acción militar, violatoria de los principios y normas internacionales, dejaría de lado ese objetivo, para derrocar al gobierno grenadino, capturar a los cubanos que se encontraban en la isla, entregar el poder al gobernador general, lograr la ruptura de relaciones diplomáticas con los países socialistas y la expulsión del personal de dichas legaciones, y mantener una fuerza de ocupación mientras no se asegure y garantice un gobierno que privilegie los intereses norteamericanos. La falta de apoyo —más aún, la crítica de sus principales aliados ante tal acción— sería subsanada por las declaraciones de los más altos funcionarios, en el sentido de que la acción debe ser una advertencia seria de lo que los Estados Unidos están dispuestos a hacer para impedir aventurerismos marxistas en la zona.

Se absolutiza la "democracia", aunque se sostiene que no se permitirá el que accedan al poder gobiernos marxistas en la región. El mismo Richard Stone, en su reciente viaje, afirmaría que "tenemos que preocuparnos por la paz y la democracia, pero más por la democracia que por la paz". Ese valor absoluto, sin embargo, se relativiza para gobiernos como los de Chile, Uruguay, Paraguay, Corea del Sur o Pakistán. La democracia formal sirve de sombrilla ideológica para mantener en Honduras un poder paralelo en la institución armada, o para explicar aspiraciones de su gobierno formuladas a la Comisión Kissinger en el sentido de convertir a su país en prácticamente un protectorado norteamericano. Pero la carencia absoluta de los mínimos requisitos de una democracia formal no es óbice para que la administración norteamericana brinde un apoyo progresivamente mayor a los sucesivos gobiernos guatemaltecos, e impulse la reconstrucción del CONDECA para una defensa de la "democracia" en la región, aun a costa de intervenciones armadas en El Salvador o Nicaragua, si el caso lo exige.

También de parte del FSLN y del FDR-FMLN el grado de ideologización es suma-

mente elevado, en la medida en que tratan de explicar todos los problemas nacionales y regionales como efecto del imperialismo y de la reacción de la lucha de clases o del espíritu contrarrevolucionario. Los errores políticos, las limitaciones estructurales, los análisis incompletos o equivocados de la realidad total no pueden ser encubiertos con un manto ideológico. La pasividad, el disentir e incluso algún tipo de oposición a la línea oficial de la dirección sandinista, no es automáticamente actitud contrarrevolucionaria y mucho menos somocista —algunas declaraciones de Edén Pastora, entre otros, deben ser analizadas con profundidad—. A veces la falta de consecuencia metodológica, o la carencia de suficientes datos materiales y objetivos de la realidad, se pretende suplir con una fuerte dosis de interpretación ideológica, que conduce a análisis incorrectos, a decisiones equivocadas, a fracasos costosos, o a desalientos alternados con euforias casi juveniles —la “ofensiva final” de enero de 1981 llevada a cabo por el FMLN en El Salvador contiene no pocos elementos de esa índole—. El cansancio de las masas, su inercia pasiva, su bajo nivel de conciencia, de compromiso o de sacrificio heroico continuado, se ubican en un nivel que no es exclusivamente ideológico.

b) La realidad “desideologizada”

En cierto sentido ya algo se ha indicado de esa realidad latente tras el discurso ideológico. Permítanme que únicamente haga referencia en esta parte a la realidad salvadoreña, a partir de los análisis académicos que hacemos en nuestra universidad, lo más objetivos y “desideologizados” que podemos desde nuestros propios condicionamientos, no sólo por razones de brevedad, sino que también por ser la única que conocemos un poco mejor.

La estructura económica implantada en El Salvador desde hace muchas décadas, basada en un liberalismo criollo, ha mostrado al mismo tiempo la incapacidad del sistema capitalista para solucionar los problemas fundamentales de la población, hasta el punto de ubicarla en los ínfimos niveles mundiales, a juzgar por los principales indicadores socio-económicos. A medida que el sistema capitalista ha ido penetrando y profundizando en todos los sectores de la producción, el deterioro de las mayorías ha mantenido una correlación directa. Estos hechos no pueden explicarse a nivel ideológico, por una desidia generalizada o caractereológica, sino que son consecuencias irremediables de una estructura económica llevada a extremos casi inconcebibles, que además ha ido levantando sucesivamente barreras insalvables a los moderados intentos de reformas dentro del sistema; al mismo

tiempo, los esfuerzos por los cambios promovidos desde las bases han sido reiteradamente ahogados en sangre.

La estructura política del país ha tenido caracteres elitistas y excluyentes. Los terratenientes detentaron directamente el poder del Estado hasta la década de los treinta, se lo cedieron a partir de entonces a la institución armada, cobijada en un partido oficial, y se ha cerrado sistemáticamente el acceso por vía “democrática” a las fuerzas emergentes o populares. La impermisibilidad para que incluso partidos centristas, como la Democracia Cristiana y sus aliados principales de la UNO, accedieran al gobierno por el voto, originaría el que los intelectuales de izquierda y las masas concientizadas o desesperadas crearan otro tipo de organizaciones políticas y de estrategias para la conquista del poder.

La estructura social salvadoreña revela una conformación radicalmente polarizada de dos clases —o grupos de clases— fundamentales, enfrentadas violentamente. Mientras la clase dominante, a pesar de sus diferencias internas, mantiene una sólida unidad orgánica frente a las demás clases de la sociedad; el sindicalismo urbano, permitido en la década de los cincuenta, se ha mantenido minoritario y dicotomizado —si no controlado por intereses extragremiales—; pero al campesinado, mayoritario en el país, se le ha privado una y otra vez del derecho —reconocido en la Constitución Política— a sindicalizarse u organizarse gremialmente, y ha tenido que enrolarse en uniones amarillas o buscar sus propios modos de organización y articulación ilegal o clandestina. Los sectores medios, por su parte, no han adquirido la importancia que de ellos se podía esperar, ni en cuanto a número ni en cuanto a representatividad activa en la vida social nacional, en parte por la división y desintegración en su seno, en parte por las características propias de tales grupos sociales.

Otro elemento estructural de la realidad salvadoreña —y no es un juego dialéctico— es la ideología. No es necesario recurrir a una interpretación mecánica ni dogmática para percibir la lucha de ideologías, y la influencia en ella de las condiciones estructurales subyacentes. En el momento presente de guerra civil desatada en El Salvador es más fácil percibir la polarización y lucha ideológica fundamental en ambos bandos. Del lado gubernamental, con las bases que lo sustentan, se defiende una ideología que propugna la democracia, la libertad, los valores occidentales y cristianos, la libre empresa, la propiedad y la iniciativa privadas, como fundamento aglutinante de las distintas opciones u orientaciones. En el

lado revolucionario, en nuestra opinión, lo que priva es fundamentalmente una crítica a la ideología y praxis capitalista como incapaz de solucionar los problemas básicos de nuestra sociedad y como impedimento absoluto para la realización de las aspiraciones y derechos de las mayorías. Dentro de esta convergencia y punto de partida común, se diferencian las motivaciones y las ideologías más concretas: un grupo importante, y en gran parte dirigente y vanguardia del movimiento, parte de una clara ideología marxista-leninista; otro grupo importante, tal vez mayoritario aunque no decisivo, parte de una ideología profundamente cristiana en su versión liberadora; otro grupo no despreciable arranca no tanto de una ideología definida cuanto de un sentimiento y una motivación profunda de humanismo, de repudio de la situación imperante, y de una voluntad sincera de cambiarla. La coexistencia y la estructuración orgánica de tales ideologías por medio de alianzas estratégicas morigerada y desradicaliza las diferencias hasta encontrar elementos comunes ideológicos y operativos.

Estos elementos estructurales se interrelacionan y se influyen mutuamente en la conformación de una realidad social compleja, en la que las distinciones pueden llenar un objetivo de interpretación analítica, pero que en la realidad conforman un entramado inseparable.

c) Condicionantes externos

La estructura social que hemos analizado someramente no es una realidad autónoma. No se trata simplemente de la interrelación que en la actualidad existe entre las naciones a nivel mundial. El Salvador, en grado mayor o menor que los demás países de la región, está condicionado por las relaciones de una profunda dependencia. La carencia de energéticos minerales, de materias primas básicas, de tecnología propia, de capitales suficientes para un despegue autónomo, la relevancia del sector primario en la economía, la imposición foránea de precios para sus productos de exportación y para los bienes importados, entre otros, le someten a unas relaciones de dominación-dependencia que no se limitan únicamente al campo económico, sino que derivan igualmente al tecnológico, político, social y cultural, pues la dependencia es una relación integral. En cualquier proyecto de nación este elemento fundamental de la realidad tiene que ser tomado muy en cuenta, dado que va a sobrevivir por largo tiempo —o a profundizarse—, condicionando el desarrollo que quiera imprimírsele.

Hay que añadir que El Salvador está enrola-

do en el bloque occidental. Sus vinculaciones de mercado, de tecnología, son casi exclusivamente con el bloque occidental. Su tradición, su historia, su cultura, su ideología, su estructura social y política, responden a los parámetros occidentales. Sus nexos y relaciones internacionales, ya sean por tratados regionales o continentales, ya sean incluso los apoyos políticos más consistentes para la causa revolucionaria —sobre todo a través de la Internacional Socialista— son básicamente occidentales, y no verían con buenos ojos, ni apoyarían —antes, por el contrario, harían lo posible por impedir— que El Salvador se pasara al bloque socialista. La polarización y tensión a nivel mundial entre los dos bloques, la ubicación geopolítica de El Salvador, harían inviable la formación o consolidación de un alineamiento de este país con el bloque socialista; y eso sin tomar en cuenta las resistencias internas para un cambio tan radical, que serían aprovechadas e instrumentalizadas por fuerzas externas hegemónicas para hacer abortar el proyecto, como repetidamente se ha visto en la historia.

Otro elemento de análisis que no se puede eludir es la existencia, cercanía y omnipresencia del país hegemónico del bloque occidental, los Estados Unidos de Norteamérica. Este país dispone de los medios económicos, técnicos, diplomáticos, políticos, militares y de la voluntad decidida —al menos de parte de la presente administración republicana— para impedir el triunfo de un proyecto marxista en la región, o para derrocarlo si coyunturalmente accede al poder, sin importarle los medios que tenga que emplear ni el repudio interno e internacional que sus acciones despierten. Así lo ha hecho público una y otra vez respecto a El Salvador, y así lo están realizando en la práctica, como el reciente caso de la intervención militar en Grenada, o en la agresión y estrangulamiento del régimen sandinista a través de Honduras y de los contrarrevolucionarios nicaragüenses con ayuda casi ilimitada, encubierta o desenmascarada, de la CIA o del Pentágono. Frente a esa voluntad decidida y eficiente, ni el bloque socialista, ni la URSS, ni Cuba, se prevé que arriesgarían la defensa y consolidación de una cabeza de playa continental que pusiera en peligro la seguridad de la isla o que desencadenara una conflagración de dimensiones mayores con riesgo de convertirse en una guerra mundial. Estos elementos de la realidad condicionan cualquier solución a que sea "tolerable" para los intereses y la seguridad de los Estados Unidos y de sus principales aliados, ya que éste es el objetivo prioritario que tiene la potencia hegemónica y al que no está dispuesta a renunciar, pasando por encima de intereses regionales, nacionales, principios morales o de soberanía conculcada.

d) La guerra en El Salvador

El dato fundamental para poder entender la actual realidad salvadoreña es la guerra, una guerra civil desatada abiertamente desde enero de 1981, y a la que no se le ve una terminación previsible abandonada a su propio curso. La guerra resume, cristaliza y concreta las condiciones estructurales que le dieron nacimiento, y a su vez penetra y condiciona todos los elementos e instancias de la realidad nacional: la economía, la política, las relaciones sociales, la existencia misma están hipostasias por la guerra o son "de guerra". No se libra exclusivamente en el campo de batalla, donde van muertos varios miles de salvadoreños de ambos bandos y la destrucción material ha alcanzado cifras astronómicas y ha deteriorado la precaria infraestructura productiva y de comunicaciones. La represión y la violación sistemática de los derechos humanos es parte de la misma guerra, ésta vinculada con algunos mandos militares —como parece haberlo reconocido el mismo D'Aubuisson ante la Comisión Kissinger—, y tiene la finalidad explícita de suprimir la base social de los movimientos y fuerzas insurgentes, "para que muera el pez sacándolo del agua". Los probablemente más de 50.000 asesinados de la población civil hasta el momento, y el respaldo que todavía tiene la guerrilla en sus zonas de control o de influencia, denotan no sólo la profundidad de la guerra civil, sino también la amplitud de la base que sustenta al movimiento revolucionario. Las mismas reformas aprobadas e impulsadas por la Junta de Gobierno en 1980 fueron instrumentalizadas como medio de guerra, no sólo por la militarización del campo con la consiguiente represión y desplazamiento multitudinario de campesinos desafectos al régimen, sino para crear una base social al mismo, así como para arrebatar banderas y base de apoyo a la revolución.

En la guerra civil salvadoreña se manifiestan no sólo las fuerzas internas, sus conflictos y su lucha, sino que también las tensiones y contradicciones internacionales. De un lado están los Estados Unidos, con su voluntad decidida de mantener la hegemonía en su zona de influencia y la seguridad de su "traspatio", para lo que mantiene ininterrumpidamente un apoyo diplomático y político, una campaña sistemática, una ayuda económica y militar, un abastecimiento ininterrumpido de pertrechos bélicos y asesores, un entrenamiento permanente de tropa y oficiales, ya sea en su propio territorio, en El Salvador o en Honduras y Panamá, lo que impide una derrota del ejército salvadoreño, un desmoronamiento del aparato político y un colapso total de la economía nacional; a esto añade todo un sistema logístico de

información y espionaje en el mar, en el aire y en territorio hondureño para impedir el abastecimiento de las fuerzas revolucionarias. Así, la guerra prosigue indefinidamente, oscilando entre la iniciativa de la guerrilla y la del ejército institucional, en un empantanamiento al que no se le ve salida próxima. En esta política el gobierno de los EE. UU. busca —y consigue parcialmente— el apoyo de sus aliados, que se ve debilitado por la repulsa de éstos —y especialmente de parte de poderosas fuerzas sociales y políticas norteamericanas e internacionales— hacia el ingrediente inseparable de la guerra salvadoreña, cual es la represión indiscriminada y la sistemática violación de los derechos humanos.

Del otro lado, los países del bloque socialista brindan un sólido respaldo ideológico, político y económico al movimiento insurgente, mientras Cuba sirve de base política y de entrenamiento militar a la guerrilla, y Nicaragua brinda una segura cobertura para la organización política y estratégica. Aunque no se ha podido comprobar la participación de combatientes de esos países, el abastecimiento de material bélico en un principio sí debió ser significativo, aunque poco a poco se ha ido reduciendo —si es que no ha desaparecido— por el control norteamericano—hondureño y por el cuantioso aprovisionamiento interno, especialmente en el campo de batalla. Por su parte, otros países, organizaciones y fuerzas internacionales, más vinculados con el mundo occidental, pero inspirados en principios socialdemócratas o cristianos, brindan un apoyo social, político, diplomático e incluso económico a las fuerzas políticas que al interior del movimiento revolucionario luchan por la recuperación de la soberanía nacional, la eliminación de las injusticias seculares, la represión a las masas, la marginación de las mayorías, y por la implantación de un sistema que sea mínimamente justo, aunque siempre dentro del espectro permisible en el bloque occidental. Todo ello permite que las fuerzas revolucionarias, manteniendo un sostenido, si no creciente respaldo internacional, desarrollen una capacidad militar ascendente, para hacer frente a un ejército nacional sustentado por los EE.UU., e incluso llevar la iniciativa de la guerra durante largos períodos de tiempo, pero sin capacidad efectiva de conseguir por sí mismas una victoria militar decisiva, a no ser que intervinieran variables más o menos independientes de la misma guerra.

Sin embargo, es también en la guerra salvadoreña donde se percibe más el alto nivel de ideologización al que se le plantea. Los análisis, proclamas, partes y pronunciamientos, oficiales u oficiosos, en ambos bandos y en las fuerzas

nacionales e internacionales que los sustentan, generalmente dejan de lado los elementos estructurales originantes y sustentadores del conflicto, para incurrir en un discurso propagandístico, que busca las causas y explicaciones en acciones voluntaristas e individuales o de movimientos organizados, en ideologías y sentimientos, que ciertamente pueden coadyuvar, pero de ningún modo determinar la crisis. Las causas estructurales profundas ya analizadas, verdaderas generadoras del conflicto, muchas veces son intencionalmente ignoradas o relegadas a un plano secundario o agravante. Un planteamiento ideologizado e ideologizante de la realidad salvadoreña, de su profunda crisis estructural, y de la guerra civil, al no enfocar la realidad objetiva, difícilmente podrá elaborar un diagnóstico correcto ni ingeniar soluciones acertadas. Por otro lado, una victoria militar, de cualquiera de los dos bandos, dejaría intacta —si no agravada más— la realidad estructural subyacente, aunque podría abrir puertas a una solución de fondo, siempre que haya un análisis correcto, medios adecuados y una decidida y operante voluntad política de implementarlo. La victoria militar, por sí misma, no resuelve los problemas estructurales que están en el fondo de la crisis y que la originaron.

LA CREACION DE UN NUEVO PACTO SOCIO-POLITICO

En la medida en que sea válido el análisis presentado hasta aquí, la solución al conflicto salvadoreño pudiera intentarse por tres vías mutuamente excluyentes: la victoria militar de uno de los bandos con la consiguiente extradición y exterminio del bando contrario, la partición territorial en dos unidades políticas, o la concertación de un nuevo pacto socio-político entre ambos bandos. La primera alternativa, aparte de que en la actual correlación de fuerzas no es previsible, que sólo se vislumbra como posible a través de una intervención militar directa del ejército norteamericano, o con la retirada total de su apoyo y sustentación, para el caso contrario, es tanto ética como políticamente de todo punto inaceptable. La segunda se presenta como irreal, no sólo por las condiciones geográficas e internas, sino por la oposición irrenunciable de los Estados Unidos y de sus aliados a permitir la creación y consolidación de un régimen, por pequeño y débil que fuese, ajeno o contrario a sus propios intereses —y el caso de Granada puede arrojar mucha luz en este sentido—. La única alternativa posible y real —aunque no por ello menos difícil de implementar— sería, por consiguiente, la negociación entre las partes contendientes y sus fuerzas sustentadoras o de apoyo,

para encontrar una solución pactada y mutuamente aceptada y respetada.

Cualquier otra solución intentada ha mostrado en la práctica ser insuficiente, inadecuada o equivocada. La guerra civil ni ha logrado, ni está logrando, ni se prevé que logrará una solución correcta al conflicto y a las causas que lo han motivado. Pero tampoco las soluciones políticas ensayadas han sido mínimamente eficaces, no ya para solucionarlo, pero ni siquiera para abrir caminos de solución. Las elecciones de marzo de 1982, a pesar de todo lo que en ellas se puso de preparación, propaganda y entusiasmo, no resolvieron el problema porque ni siquiera se lo plantearon. El problema no se ubica a nivel ideológico ni de estructura política o de distribución de una cuota mínima y casi simbólica del poder formal. Pero el hecho de que el bando insurgente se negara a participar en las citadas elecciones, inhibía la posibilidad de alcanzar un pacto político que abriera canales hacia la construcción de un pacto social y económico. Los grandes problemas y sus causas estructurales, así como la guerra, no se cuestionaban ni se sometían al voto de los ciudadanos; no había para elegir más que modalidades accidentales y secundarias de un solo proyecto, cuando el problema fundamental está planteado a la raíz de ese mismo proyecto. Las elecciones de 1982, en las que tantas esperanzas se habían depositado al menos a nivel ideológico y propagandístico, no resolvieron nada, como no han podido menos que reconocer sus mismos entusiastas creadores o defensores.

El resultado inmediato de las elecciones fue una distribución del poder político distinto del previsto y deseado, lo que originó de inmediato una fuerte lucha por el reparto y control del poder real y de la hegemonía, con presión directa e intervención de los Estados Unidos a través de la institución armada. Esto llevó a la frustración de las aspiraciones de los partidos antidemocráticos coaligados y a las protestas correspondientes, a un intento de involución del proceso de reformas impulsadas por el gobierno anterior, que fue también entorpecido por la potencia hegemónica, pero que llevó a un mantenimiento formal y aparente por el hecho de que las fuerzas más antirreformistas lograban el control de todo el aparato de estado relacionado con las reformas y la paralización o debilitamiento de los mecanismos necesarios para su desarrollo y éxito. Un nuevo intento de aglutinamiento de las fuerzas políticas sustentadoras del sistema fue realizado en agosto del mismo año, con el "Pacto de Apaneca", que daría origen a un consenso mínimo en el campo ideológico-político, a una distribución proporcio-

nal de cargos y puestos, y a la creación de una serie de organismos y comisiones para diversos fines, las que después de la euforia de su nacimiento y primeros pasos, poco a poco, una tras otra, irían pasando a una posición secundaria y relegadas casi al anonimato, sin lograr resultados positivos relevantes en sus tareas asignadas.

La misma elaboración de la Constitución Política, pacto social básico entre las fuerzas políticas intervinientes, ha ido mostrando con el correr de los meses la dificultad de construir un verdadero acuerdo entre los intereses encontrados a un nivel de diferenciación muy secundario y relativo. Los artículos que no afectan al régimen económico y a los intereses que en él se cifran, aunque con lentitud de procedimiento, no han encontrado mayor discusión ni resistencia, a pesar de la dicotomización de partidos y fuerzas políticas en la Asamblea Constituyente, en la que ninguno tiene una mayoría decisoria ni cuenta con aliados suficientes y consistentes para la implementación de su proyecto específico, incluso con la creación de nuevos partidos desgajados de los clásicos y el peregrinaje de diputados de uno a otro. Las diferencias difícilmente reconciliables se insinuarían ya en lo referente al régimen laboral, pero en los artículos 104 y 105, que tienen que ver con la tenencia de la tierra y con la aplicación de la anunciada segunda fase de la reforma agraria —que afectaría principalmente a las explotaciones cafetaleras—, es donde el acuerdo entre las distintas fuerzas representadas en la Asamblea Constituyente no lograría cristalizar, ni tampoco las alianzas obtendrían la mayoría mínima requerida para aprobar algún compromiso. Ni siquiera al interior de un proyecto económico capitalista se logra un consenso entre las opciones secundarias de las distintas fuerzas que lo propugnan, por lo que los referidos artículos de la Constitución son postergados reiteradamente. ¡Cuánto más difícil será llegar a algún mínimo consenso entre los representantes de ambos bloques en guerra, entre sus opuestos proyectos y sus ideologías antagónicas!

Sin embargo, y aunque extremadamente difícil, el diálogo y la subsiguiente negociación se presentan como la única alternativa real para llegar a un consenso entre las partes en pugna y para construir un nuevo pacto socio-político para la reconstrucción nacional. Ese consenso, ese pacto, no puede quedarse al nivel ideológico —no es allí donde están las raíces y las causas del problema—, sino que tiene que alcanzar las bases estructurales económicas, políticas y sociales. La incompatibilidad antagónica con que se los presenta, debe ser desideologizada, debe hacerse descender del plano de la ideología al plano de la realidad empírica,

concreta, coyuntural y pragmática; desde los ideales utópicos o intemporales hasta los estrechos márgenes de posibilidad histórica; desde ámbitos optimistas hasta los ámbitos optimizables. Como en todo pacto, en toda alianza, en todo consenso entre grupos y fuerzas encontradas, los ideales primigenios tendrán que ceder hasta niveles irrenunciables, ciertamente, pero permisibles y pragmáticos, en ambos bandos, hasta que converjan en un rango conjuntamente aceptable. Cuando los intereses propios, las opciones políticas sectoriales, las ideologías radicales, cedan frente a los valores e intereses nacionales y se subordinen a éstos, se habrán derribado las primeras barreras que se interponen entre ambos bloques en pugna.

Para lograr este primer paso probablemente será indispensable la mediación y el poder de convicción de los países y fuerzas que sustentan a cada uno de los bandos, aunque sólo fuera por la persuasión de la irracionalidad e irrealidad de cualquier otra alternativa, o movidos por un sentimiento de humanitarismo que repudie el sufrimiento y la destrucción de un pueblo como el salvadoreño —y el centroamericano—, al tiempo que trata de eliminar motivos u ocasiones que posibiliten una más profunda y extensa conflagración regional o mundial.

NEUTRALIDAD ACTIVA DE COSTA RICA

Costa Rica, por su conformación y evolución histórica, ha resaltado justamente como una excepción y un modelo en el área centroamericana. Sus estructuras incomparablemente menos injustas que las del resto de la región, sus relativamente elevados niveles sociales, su larga tradición democrática, su acendrado pacifismo y la consiguiente desmilitarización, se convierten en ideales a imitar por los demás países cercanos. A esto se agrega el ESTATUTO (o PROCLAMA) DE NEUTRALIDAD DE COSTA RICA, firmado y promulgado por su Presidente, Luis Alberto Monge, el día 15 de septiembre de 1983.

Reconociendo y alabando los altos principios y valores políticos y éticos que contiene, y en los que está inspirado, pienso que ese documento tiene que ser a su vez desideologizado para aprovechar su rico contenido en bien de la paz en la región, a fin de que no quede relegado a un papel eminentemente nacional, ni se convierta en un simple acto laudable pero voluntarista. El documento encierra un contenido suficiente como para generar una dinámica coadyuvante en el proceso de pacificación y reconstrucción social del área, que no puede ser desaprovechado.

El Estatuto de Neutralidad está sustentado en la conformación social histórica de Costa Rica, en los principios de la moral universal y las normas del derecho internacional, entre los que resalta el pluralismo y la tolerancia ideológicos, la no intervención y el respeto al derecho que asiste a todos los pueblos a darse el gobierno que su sociedad desee; asimismo, la devoción costarricense a la causa de los derechos humanos no se queda a nivel ideológico o voluntarista, sino que trata de descubrir las causas estructurales de su violación —la injusticia estructural— y de ayudar a remediarlas; por último, la conducta internacional de esa nación ha sido consecuente con los principios anteriores, hasta el desarme unilateral, por lo que ostenta una fuerza moral en el concierto regional e internacional. La declaración de neutralidad que sigue está investida de una serie de características: es activa —no imparcial—, autónoma y soberana —sin autorizar a ningún otro Estado a interpretar auténticamente sus límites y consecuencias—, calificada —consecuente con los principios establecidos previamente y con los compromisos internacionales contraídos—, desarmada y permanente —no coyuntural y referida al actual conflicto ni a una parte restringida del mundo—, por lo que se compromete a luchar porque sea incluida en la Constitución Política de la República.

La desideologización indispensable para extraer de esta postura toda la riqueza que encierra, nos debe llevar a descubrir las limitaciones concretas de la misma, a fin de aprovechar al máximo el potencial que contiene para una coyuntura como la presente. Se proclama que la neutralidad será activa, no imparcial, optando por el bloque occidental, lo que ya de por sí condiciona dicha neutralidad. El bloque occidental no es una simple idea, sino que es una realidad muy concreta, y con una historización determinada en América y en nuestra región; con una estructura económica, ideológica y de poder específicos, una potencia hegemónica muy próxima y muy presente con unos intereses que hace prevalecer sobre los nacionales, que impulsa unas relaciones internacionales en el área y practica una intervención multifacética en la misma. La autonomía y la soberanía enaltecidas, a su vez, se ven limitadas por una profunda relación de dominación-dependencia, agravada en crisis económicas y financieras agudas, como la presente; por otro lado, el compromiso de respetar los convenios y tratados internacionales contraídos, condiciona el presente y futuro a un pasado enmarcado dentro de unos márgenes muy precisos. La "calificación" de dicha neutralidad, por su parte, puede verse obstaculizada cuando esas agresiones o condenas afecten a la potencia hegemónica dominante o a los países

con los que se tiene vínculos contraídos por los ratificados sistemas de seguridad colectiva aunque en sus acciones no detenten ni razón ni justicia, como podrían ser los casos de intervención armada en Grenada o de posibles acciones similares en El Salvador o Nicaragua. El militarismo galopante en la región, la reestructuración y revitalización del CONDECA y las declaraciones de agresividad bélica, están incrementando las presiones sobre Costa Rica para que abandone su desmilitarización, su ideal y su tradición de solucionar los conflictos por la vía pacífica y diplomática, o se convierten en una peligrosa amenaza a sus intereses y principios si se desata una guerra en el área que de algún modo la afectaría; pero ya la misma tensión actual y la histeria belicista están deteriorando los intereses económicos y comerciales de Costa Rica con los países vecinos. Por último, la permanencia y universalidad de su neutralidad no puede convertirse en un recurso retórico que eluda los conflictos concretos, sino que debe volcarse prioritariamente en los más presentes y cercanos a su geografía y a su historia.

La neutralidad de Costa Rica, por lo tanto, no puede en ningún momento, y menos en el presente, derivar hacia una actitud simplemente negativa, de abstención en el conflicto centroamericano y regional, o de distanciamiento político e ideológico del mismo, ni parece ser ese el sentido que se puede extraer del análisis del documento. Pero hay algo mucho más fundamental e importante. No se puede ser neutral ante ciertos principios, valores y realidades inaceptables desde cualquier punto de vista ético o político, como el mismo documento lo reconoce. No se puede ser neutral frente a la guerra, a la destrucción, a la ruptura de una sociedad, al sufrimiento humano, a la injusticia estructural, a la violación sistemática y constante de la soberanía, la dignidad y los intereses nacionales. No se puede ser neutral frente a la violación continua y macabra de los derechos humanos más primarios, frente a la represión, la tortura y el terror. No se puede ser neutral frente a la miseria de las mayorías, a la negación permanente de acceso a los bienes fundamentales, ya sean materiales, espirituales, políticos o religiosos. No se puede ser neutral frente a la dominación e intervención extranjeras, que dictan los destinos de los gobiernos y de los Estados, a la mentira sistemática para encubrir y tergiversar los verdaderos motivos que subyacen en esos actos; ni a las confabulaciones y arreglos encubiertos para cambiar el curso y el destino político de los pueblos. Como tampoco se puede ser neutral frente a la instrumentalización de esta miseria y dependencia, de esos deseos de liberación, para ampliar el ámbito y la órbita del bloque socialista; frente a la implanta-

ción de una dictadura —por más que se la considere como del proletariado— para justificar ambiciones personales o de grupos elitistas apoyados por los sacrificios del pueblo, o para implantar una violación sistemática de los derechos humanos y un cierre a la aspiración por la libertad y la liberación de un pueblo.

Desideologizada severamente esta neutralidad, y ubicada en su ámbito de posibilidad y realidad, respaldada por el enorme peso moral que le asiste, Costa Rica está llamada a desempeñar un importante papel desde su neutralidad positiva y activa. Amparada y sustentada en sus valores y principios históricos reconocidos en el Estatuto, tiene que luchar porque se conviertan en una realidad no sólo para ella sino para la región y el mundo.

Dondequiera que sean violados o pisoteados

esos principios y valores, por cualquier nación grande o pequeña, allí deberá estar presente Costa Rica con su más enérgica protesta y con su testimonio ejemplar. Dondequiera que se busquen soluciones bélicas para resolver las diferencias, allí deberá estar activamente presente Costa Rica para disentir, protestar e inducir racionalidad e imaginación en la búsqueda de soluciones pacíficas. Dondequiera que haya fuerzas o naciones que busquen soluciones pacíficas a los conflictos, allí deberá estar presente Costa Rica como miembro activo y eficiente. En el Grupo de Contadora está su lugar político natural para el conflicto regional. En las Naciones Unidas o en la OEA su voz y su trabajo tienen que hacerse sentir con un peso específico, para inclinar la balanza hacia soluciones pacíficas y de racionalidad. Centroamérica le reconocerá algún día su esfuerzo positivo en la construcción de la paz.